

No es barra libre

JORDI SEVILLA

EL MUNDO – MERCADOS – 14.12.08

Tengo la impresión de que algo estamos haciendo mal. Concentrados en la búsqueda de soluciones a la crisis, corremos el riesgo de que las cosas se nos vayan de las manos porque se nos olvide cuál era el origen del problema. Parece que se está instalando entre algunos gestores privados una idea peligrosa: dejemos que se ocupen los gobiernos de la gestión de la crisis y abandonemos toda responsabilidad social propia.

Quizá ello explique que los créditos a la economía real no se hayan restablecido de manera proporcional al esfuerzo público que los gobiernos y los bancos centrales han hecho con el sistema financiero para que así sea. Millonarias inyecciones de dinero, descensos significativos de tipos de interés, avales y garantías estatales para préstamos y emisiones: nada parece suficiente para reactivar el mercado interbancario, bajar suficientemente el Euribor o trasladar liquidez a la economía real. No sé si nuestros banqueros y bancarios son conscientes de que cada día que pasa sin que transformen en crédito las ayudas recibidas se incrementan las demandas a favor de su nacionalización, o las sospechas de que sus balances no estaban tan saneados como decían. Porque hay empresas y puestos de trabajo en riesgo y porque con la crisis hemos roto algunas de las barreras convencionales de actuación en política económica.

No soy partidario de entender lo que ha pasado en clave de comportamientos personales avariciosos, ni creo que todo se deba a errores en la gestión de la política monetaria o en la supervisión

bancaria. Sin necesidad de ser marxista, me inclino por pensar que es en la lógica del sistema económico que hemos construido en las últimas décadas donde hay que buscar la causa de nuestras dificultades. En la lógica de un sistema capaz de desarrollar al máximo todo lo bueno de nuestro potencial económico, pero capaz también de permitir, cuando no estimular, comportamientos irracionales o fallos evidentes (ahora) de regulación financiera y que presenta una tendencia intrínseca a las crisis periódicas.

Verlo así tiene gran utilidad práctica más allá del apasionante, aunque enmarañado debate, sobre quién tenía razón. Una utilidad no para buscar culpables, pero sí para establecer límites y solicitar responsabilidad social por las ayudas públicas cuantiosas que los gobiernos están poniendo a disposición de unos más que de otros. Como ven, no hablo de si estas ayudas públicas alteran o no la competencia. Hablo de una cuestión (casi) moral. Por ejemplo, ¿pueden los bancos y cajas no aceptar las ayudas ofrecidas, por una cuestión de imagen? O mejor todavía, después de recibirlas, ¿tienen derecho moral a quedárselas y no repercutirlas a las familias y empresas?

Ante el bloqueo de liquidez, los gobiernos han tenido que autorizar una especie de by-pass financiero heterodoxo, permitiendo que el Tesoro o nuestro ICO presten dinero directamente a empresas y familias. Además, esta misma semana hemos debatido en el Congreso de Diputados una moción presentada por Convergencia i Unió precisamente para instar al Gobierno a adoptar nuevas medidas que trasladen a los sectores productivos la liquidez necesaria para garantizar su actividad. Medidas que se centraban en una nueva vuelta de tuerca a los Presupuestos del

Estado para exprimir de ellos lo que deberíamos exigir que facilite el sistema financiero pero que no hace. Al menos, todavía.

Está muy bien que no exista un corsé ideológico que impida actuar con contundencia desde los Presupuestos cuando todo lo demás falla y el paro crece de manera desmesurada. Pero de ahí al «todo vale», hay pasos que no deberíamos dar por cuestiones económicas obvias, como que el déficit y la deuda de hoy son los impuestos del mañana, pero, sobre todo, por una cuestión de principios.

En los inicios del debate sobre los paquetes de ayuda a la banca, ya vimos protestas ciudadanas ante el hecho de que los responsables de habernos llevado a la crisis siguieran cobrando sus cuantiosos bonos y viajando en aviones privados a costa, ahora, del dinero público de salvamento. La cuestión era: ¿debemos ayudar a los que se han hecho ricos con decisiones que han acabado provocando la crisis?

La segunda fase de la discusión fue: ¿qué garantías tenemos de que si ayudamos a la banca ella nos ayudará restableciendo el mercado de créditos? En mi opinión, fallamos en la respuesta a esta pregunta. Debimos imponer condiciones a estas ayudas en términos de compromisos concretos de trasladar una parte de esa liquidez a la economía productiva, con mecanismos de control por parte del Banco de España y de sanción en caso de incumplimiento.

La sociedad está haciendo un importante esfuerzo para pagar platos que no ha roto. Pero si aquellos que perciben las ayudas no se comportan a la altura de las exigencias, si no reconocen que no hay barra libre y que tienen responsabilidades sociales también ellos en favor de los

ciudadanos que les están ayudando a través del Estado, las cosas pueden cambiar de base.

Estos días, gracias a la intervención judicial, nos estamos enterando de que una gran constructora española tenía inflados sus balances, junto a otros activos importantes fuera de ellos. Nada de esto impidió que las tasadoras y los bancos les dieran generosos créditos como si todo estuviera bien. Eso, que no tenemos por qué asumir que haya sido una práctica aislada, no es un fallo de regulación. Y cuestiona el comportamiento de algunos que, tal vez, han tenido más responsabilidad que otros en que las cosas hayan llegado al punto al que han llegado. Por tanto, cuidado. Que los gestores de nuestro sistema financiero no echen en saco roto todo lo que ha pasado y está pasando. Que sean tan responsables y cuidadosos con el cumplimiento de sus obligaciones con la sociedad como se les va a exigir que lo sean a quienes van a perder su trabajo y su vivienda, por haber aceptado cosas que, con ojos de hoy, no lo eran. Y no lo son.